

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

19ª REUNIÓN

18ª SESIÓN ORDINARIA

31 de mayo de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de mayo de 2017, siendo la hora 15 y 17:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 39 señores legisladores, declaro abierta la 18ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.

Invito a la señora legisladora Trigo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Trigo procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se agreguen como coautores del proyecto 22052 a los legisladores del bloque Córdoba Podemos y al legislador García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la legisladora Ferrando.

Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautores del proyecto 22049 a los legisladores del Interbloque Cambiemos.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Oviedo.

Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto 22060/L/16 a la legisladora Romina Cuassolo y al legislador José Eugenio Díaz.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Bustos.

Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores del expediente 22041 a las legisladoras Cuenca, Chiappello y Nebreda.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Caserio.

Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautor del proyecto 22063 al legislador Somoza.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 85 del Orden del Día sea girado al archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de girar al archivo el proyecto correspondiente al punto 85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 101, 104 y 148 del Orden del Día vuelvan a comisión.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 101, 104 y 148 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 7, 16, 18, 21, 22, 23, 29, 41, 44, 45, 66, 70, 73, 74, 81, 114, 117 al 124, 126 al 142, 144 al 147, 154, 155 y 163 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 19ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 7, 16, 18, 21 al 23, 29, 41, 44, 45, 66, 70, 73, 74, 81, 114, 117 al 124, 126 al 142, 144 al 147, 154, 155 y 163 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 19ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 20ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 56, 83, 84, 86 al 100, 103, 105 al 113, 152, 153, 156, 158 al 162 y 164 del Orden del Día.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 20ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 56, 83, 84, 86 al 100, 103, 105 al 113, 152, 153, 156, 158 al 162 y 164 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

En consecuencia, quedan incorporados al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Legislador Gutiérrez: continúe con el uso de la palabra.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6, 8 al 15, 17, 19, 20, 24 al 28, 30 al 40, 42, 43, 46 al 55, 57 al 65, 67, 68, 69, 71, 72, 75 al 80, 82 y 151 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 6, 8 al 15, 17, 19, 20, 24 al 28, 30 al 40, 42, 43, 46 al 55, 57 al 65, 67 al 69, 71, 72, 75 al 80, 82 y 151 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

En consecuencia, quedan incorporados al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

Formulo moción de vuelta a comisión del expediente 21320/L/17, atento a que he recibido la contestación al pedido de informes.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el legislador Nicolás.

Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.

Sra. Vagni.- Perdón por lo extemporáneo, señor presidente.

Solicito que se incorpore al proyecto de declaración por el Día Mundial del Ambiente, 22033/L/17, como autores al bloque Cambiemos y al legislador Fresneda.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.

Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.

Solicito que se incorpore como autores del proyecto 22041/L/17 al bloque Córdoba Podemos, y al legislador Fresneda como autor del proyecto 22080/L/17.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21507/E/17, con despacho de comisión.

Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 31 de mayo de 2017.

Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21507/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, donando al Municipio de Colonia Italiana, un inmueble para la construcción de viviendas sociales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Buttarelli.

Sr. Buttarelli.- Señor presidente, señores legisladores: en esta oportunidad me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, para fundamentar el proyecto de ley 21507/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se dona a favor de la Municipalidad de Colonia Italiana un inmueble de propiedad de la provincia para ser destinado a la construcción de viviendas sociales.

Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas comisiones, cuyos dictámenes son favorables.

Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley provincial 7631, Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración, que en su artículo 126 dispone que “la concesión, el usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y desafectación de dominio serán siempre autorizadas por ley”.

En lo referente a la materia del presente proyecto, debo mencionar que el terreno objeto de esta donación consiste en una fracción de terreno ubicada en la citada localidad, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia de Córdoba.

El inmueble a donar se designa según título: Manzana 41, que consta en el Registro General de la Provincia de Córdoba en relación al Dominio 317, Folio 279, Tomo 2, año 1901, a nombre de la Provincia de Córdoba, con una superficie total de 12.100 metros cuadrados, siendo su nomenclatura catastral 1905260101055001, y su número de cuenta ante la Dirección General de Rentas 190503693341.

Es importante destacar que el mencionado inmueble es ocupado desde hace 114 años por la Municipalidad de Colonia Italiana y que, desde hace más de 20 años, se han construido en el mismo cuatro viviendas sociales, siendo la pretensión del gobierno local seguir con la construcción de este tipo de viviendas.

A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones y la documental que se acompaña en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que el proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de su aprobación.

Señor presidente, estando convencidos que esta donación propicia la concreción de una iniciativa de enorme trascendencia para la ciudadanía de Colonia Italiana, la cual no es ajena a la problemática global de carencia de vivienda social, es que propiciamos la aprobación de este proyecto de ley. Sin más, quiero adelantar el voto positivo de mi bloque de Unión por Córdoba y solicitar a mis pares de otras bancas que acompañen este proyecto de ley en el mismo sentido.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 21507/L/17, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

La votación en particular se hará por número de artículo.

-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Tenemos reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21563/E/17, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 31 de mayo de 2017.

Al señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21563/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, donando al Municipio de Saturnino María Laspiur un inmueble para dependencias públicas.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, para fundamentar el proyecto de ley 21563/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur un lote de terreno de propiedad de la Provincia, a fin de ser destinado a atender necesidades de dependencias públicas.

Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley provincial 7631, Ley Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración, que en su artículo 126 dispone: "... La concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y desafectación de dominio serán siempre autorizadas por ley".

En lo referente a la materia del presente proyecto, debo mencionar que el terreno objeto de donación consiste en un inmueble ubicado en la citada localidad, Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, que se designa según Plano de Subdivisión número 1536 de la Dirección General de Catastro, inscripto al Protocolo de Plano número 64.389 y al Protocolo de Planilla número 89.769 como Lote 3 de la Manzana 13, con una superficie total de 1478 metros cuadrados; consta inscrito en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en relación al Protocolo de Dominio número 25.472, Folio 38.422, Tomo 154 del año 1973, siendo su Nomenclatura Catastral 30-02-53-01-01-016-005 y su Número de Cuenta ante la Dirección General de Rentas 30-02-1878474-1.

En el predio que se pretende donar se encontraba la sede de la Subcomisaría local hasta el año 1994 en que ésta es trasladada al actual edificio, construido en el inmueble que oportunamente donó el Municipio de Saturnino María Laspiur a la Provincia de Córdoba, el que consta inscrito en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula número 369.401, a nombre de ésta última, todo ello en el marco de un acuerdo entre la Provincia y el municipio.

La donación del inmueble municipal fue dispuesta mediante Ordenanza 278/87 y aceptada por el Gobierno provincial por Decreto número 1911 del 30 de julio de 1992.

Atento a todo ello, corresponde ahora que el Estado provincial cumplimente con su compromiso original, procediendo a concretar la donación prevista en el presente proyecto.

Es importante destacar que el inmueble objeto de la donación en tratamiento actualmente no tiene edificaciones ni utilidad alguna y que el gobierno local pretende destinarlo a la instalación de dependencias públicas, las que, sin lugar a dudas, redundarán en beneficio de los habitantes del lugar.

A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones respecto a la documental que se acompaña en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que el proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de su aprobación.

Señor presidente: sin más que agregar, sólo quiero adelantar el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba, y solicitarle a mis pares de las otras bancadas legislativas que acompañen el presente proyecto de ley.

Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 21563/E/17, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

La votación en particular se hará por número de artículo.

– Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en particular el proyecto.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 149 del Orden del Día, proyecto 20978/L/17.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMSIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

Muchos se preguntarán por qué he solicitado que se debata este tema.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.

Ruego silencio en el recinto.

Continúe, legislador.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

No tengo problemas, señor presidente, yo espero que hagan silencio.

Muchos se preguntarán –repito- por qué he solicitado el tratamiento de este tema si el Ministro ha venido a esta Legislatura.

En la sesión no del miércoles pasado sino la anterior, debatimos el tema de la seguridad o inseguridad. Quiero hablar con franqueza, no sé si los años me estarán jugando una mala pasada pero no entendí nada de la contestación que dieron; le aseguro que si le pido al miembro informante de hace 14 días que la repita no va a estar en condiciones de hacerlo –lo digo con total y absoluto respeto- porque –lo digo con franqueza- no se entendió nada sobre un tema que es tan delicado como el de la seguridad en la Provincia de Córdoba.

Este Gobierno provincial, que cree que se está desayunando con esto, lleva 18 años en el Gobierno de Córdoba.

¿Por qué digo que el Ministro tendría que venir, no a una comisión sino al recinto? Creo que tendría que venirse a vivir acá, por la situación que se está viviendo hoy en la Provincia de Córdoba con respecto a este tema tan difícil.

Hoy, el Diario La Voz del Interior dice: “Se denuncian 10 robos por hora” -le van a tener que contestar a Guerrero, no a mí, porque esto está en La Voz del Interior. Dice: “Divulgaron las cifras oficiales sobre la inseguridad”; “Cada día, 167 delitos contra la propiedad se denuncian en la ciudad de Córdoba”.

Como oposición –he escuchado decir que la “minoría” se queja-, muchas veces necesitamos que se den las repuestas válidas para saber el porqué de esta cifra, que es la más alta de toda la Provincia.

En total se receptan 246 presentaciones judiciales diarias por robos y hurtos, señor presidente. Estos números surgen a partir de un informe que presentó ayer la Provincia, por primera vez. De acuerdo con este registro, durante el 2016 se denunciaron 62.409 robos y 27.776 hurtos en la Provincia; en total, son 90.185 delitos contra la propiedad en sólo 366 días. Se puede deducir que en la ciudad de Córdoba se denunciaron 7 robos o hurtos por hora, mientras que en el interior sucedieron 3 de estos casos cada 60 minutos.

“Conviene destacar –sigue diciendo la nota- que se trata de casos denunciados y se estima en un 50 por ciento los que no lo son”.

La tasa ubica a Córdoba entre las 4 primeras con peor registro en el mapa nacional, de acuerdo con los datos de 2016.

En un reportaje que le hicieron al Ministro Juan Carlos Massei decía: “Hoy es un día histórico, creamos el Observatorio y silenciosamente fuimos trabajando con una mirada autárquica. Este mapa del delito, que va a ser para prevenir, se hizo con el apoyo de la Policía Judicial y de la Policía Provincial y trabajamos para unificar los datos. Sabemos que a la inseguridad –y acá está la respuesta del Ministro- no la vamos a resolver de un día para el otro, pero lo que no podemos hacer –escuchen esta frase- es mentirnos más”, aseveró el Ministro que tiene a su cargo la seguridad.

A confesión de parte, relevo de prueba, señor presidente. Quiere decir que estos largos dieciocho años que llevan en el Gobierno provincial han estado mintiendo y que, de ahora en más, parece, según lo que nos dice el Ministro, no van a mentir más. Ojala que estén a tiempo y que entre todos podamos subsanar o colaborar para que esto no siga creciendo.

Cuando se habló del tema de la previsión, escuché que compraron dos mil armas en compra directa. Podemos estar de acuerdo en que se necesitan las armas, pero ¿en dieciocho años no previeron que tenían que tener la Policía con armas, chalecos, vehículos? Pero sí veo que tienen previsión en cuanto al gasto de combustible: seiscientos mil pesos por día gasta el Ministerio de Gobierno en combustible y mantenimiento de vehículos.

Escuchaba un reportaje que le hacía al Ministro el periodista Genesir, y creo que las preguntas que le queremos hacer en este recinto se las hacía él al aire, porque es la misma duda que tenemos todos los que estamos en la oposición.

Por lo tanto, solicito al Pleno que haga lugar a la petición de que venga el Ministro no a la comisión, sino que –esta es la propuesta concreta- lo haga a este recinto a los efectos de que los legisladores podamos sacarnos todas las dudas sobre este tema tan preocupante, que ya no lo dice sólo la oposición sino también los organismos que ustedes han creado para prevenir, que no tuvieron la precaución de hacerlo durante estos dieciocho años.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Farina.

Sr. Farina.- Señor presidente: con relación al proyecto en tratamiento, quiero aclarar que hace dos semanas estuvimos debatiendo extensamente el tema de seguridad y el de la Policía de la Provincia de Córdoba y se evacuaron todas las dudas, se dieron todas las respuestas, razón por la cual –le digo a través suyo al señor legislador Nicolás– nos vamos a remitir a lo expuesto oportunamente y que consta en el respectivo Diario de Sesiones.

Sin perjuicio de ello, quiero manifestar que en el día de ayer se publicaron cifras oficiales sobre la inseguridad por parte del Observatorio de Estudios sobre la Convivencia y Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno y Secretaría de Seguridad de la Provincia. Dichas cifras van a servir para elaborar un mapa del delito que permita construir estructuras tácticas y de prevención y así combatir el problema de la inseguridad.

Por lo expuesto, señor presidente, quiero solicitar el cierre del debate y el pase a archivo del presente proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto 20978/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

—BIENVENIDA—

Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informarle al Pleno que se encuentra visitándonos un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, para quienes solicito un fuerte aplauso.

Bienvenidos, queridos estudiantes. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Se me informa por Secretaría que los puntos 115 y 157 han sido enviados a comisión, remitidos por su autora, con una preferencia de siete días.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 116 del Orden del Día, proyecto 19863/L/16, que por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

—CÁMARA EN COMISIÓN—

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: hemos traído a debate este pedido de informes que cuenta con algunas respuestas del Ministerio de Educación. El mismo versa sobre el estado de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, y lo traemos a colación porque nos parece importante plantear algunas reflexiones en el recinto.

En primer lugar, porque estamos a días de una nueva jornada del “Ni Una Menos”, el 3 de junio, que implicará movilizaciones en todo el país, porque en Córdoba siguen ocurriendo los femicidios, porque en el año 2016, en nuestra Provincia, hubo una cifra récord de femicidios —23—, y porque este aspecto que hace a la educación sexual integral tiene que ver con uno de los ángulos profundos por el cual, entendemos que hay que combatir la violencia contra las mujeres.

Hay que decir que entre los datos que nos han aportado las respuestas a estos pedidos de informes, hay algunas cuestiones significativas, entre ellas, tal como balancean los propios voceros del área a cargo de la implementación del Programa de Educación Sexual Integral, si bien los docentes han sido capacitados para todas las escuelas de nuestra Provincia, a diez años de la votación de esta ley y a más de seis años de que se está implementando en la Provincia —con materiales, capacitaciones y demás—, la educación sexual integral no se aplica en todas las escuelas. Los propios voceros del área reconocen que, en general, la aplicación de la educación sexual integral está librada a la buena voluntad y compromiso de los docentes individualmente, que son quienes se enfrentan cotidianamente a situaciones no sólo de violencia sino de tener que responder a cuestionamientos que hacen los estudiantes.

Del informe se deduce que las capacitaciones directas han alcanzado en nuestra Provincia, entre los años 2013 y 2015, a 8541 docentes, en tanto que las capacitaciones indirectas alcanzaron a 35.860 docentes.

Cualquier docente que haya participado de las capacitaciones directas, con personal idóneo, con gente que realmente ha estudiado e investigado en materia de género y que tiene un abordaje teórico acorde con esta problemática, sabe lo que se pone en juego en esas capacitaciones, muy bien diseñadas por un equipo que lleva adelante un trabajo realmente encomiable.

Sin embargo, esas capacitaciones no llegan, de manera directa, ni siquiera a un tercio de los docentes de nuestra Provincia. Si contamos a los docentes suplentes, que también se hacen cargo de esta problemática y trabajan en condiciones de mayor precarización,

observaremos que ni siquiera llegan al 10 por ciento del total de docentes. De tal manera, aquí hay un primer gran eslabón débil en la capacitación en educación sexual integral.

El estudio realizado por la licenciada Andrea Marozzi –incluido en el programa provincial implementado– señala que hay un especial obstáculo implicado en las instituciones y en los rasgos institucionales de las escuelas en las que se debería abordar la educación sexual integral. Si bien este problema está reconocido –el propio informe nos da la respuesta, al indicar que fueron capacitados 4.945 directivos de las escuelas–, monitorearon, evaluaron e hicieron un seguimiento sobre 586 directivos de las instituciones, lo que representa una porción completamente ínfima siendo que ellos, como parte importante de la estructura organizacional de una escuela, son los responsables de llevar adelante estos programas y la implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral.

Esto es más grave aún –así lo reconoce este estudio– en las escuelas que tienen carácter religioso. Al respecto, dice esta investigadora: “En las escuelas donde la estructura religiosa tiene una fuerte presencia, están en mejores condiciones de dificultar el ingreso del enfoque (...), que es totalmente diferente y entra en contradicción con el discurso religioso por sus fundamentos antropológicos y filosóficos, y filtran y desvirtúan el enfoque conceptual que sostiene la Ley 26.150”. En tal sentido, no hemos encontrado nada que indique cuáles son las acciones del Ministerio de Educación para enfrentar estos obstáculos, que afectan a un gran porcentaje de escuelas de nuestra Provincia.

Otras de las dificultades que surgen en el marco del abordaje de la educación sexual integral son los temores que presentan los docentes y la falta de capacitación real que alegan, producto de los tiempos y ritmos de trabajo, tanto en la escuela como en la propia vida y rutina de los docentes. Esto podría empezar a subsanarse –tal como venimos sosteniendo para el conjunto de trabajadores– si los docentes tuvieran menos horas de jornada diaria. Al respecto, sostenemos que deben estar cuatro horas frente al aula y tener dos horas destinadas a capacitación.

De esa manera, las docentes y los docentes podrían estar mucho mejor preparados y capacitados para enfrentar las situaciones conflictivas que se presentan en las aulas. Esto tiene que ver con la posibilidad de apertura de un proceso y que cuando se habla de educación integral haya un dispositivo de escucha para evitar diversas problemáticas de niñas, niños y adolescentes –recordemos que en este recinto tratamos el caso “Collegium”–, entre las cuales se cuentan, por ejemplo, el abuso, la violación y la violencia. Ni qué hablar del problema de los prejuicios que se filtran en la intervención y el planteo de la educación sexual integral.

Precisamente, la educación sexual integral saca el problema de la sexualidad del área de la biología y lo plantea en el terreno de los derechos, del cuidado de la salud, de los valores que se ponen en juego y donde entran, justamente, todos estos prejuicios. Prejuicios que sostiene toda la población y que hemos escuchado hasta en boca del propio Gobernador cuando habla de la familia como forma nuclear y la única capaz de contener a los individuos y cuando habla de la mujer como la única capaz de subsanar los lazos rotos en una situación de violencia familiar.

Ese tipo de prejuicios, que hasta el propio Gobernador se digna poner en una cartilla, son aquellos sobre los que hay que discutir y combatir en el seno del área de la educación sexual.

Por ello, a pesar de que en la respuesta a este pedido de informes nos contestaron que se habla en las escuelas y que es parte del material utilizado, también está ausente la guía sobre abortos no punibles, es decir, la guía de interrupción legal del embarazo. No hemos podido encontrar este material en las capacitaciones que se llevan adelante en las escuelas; tampoco lo hemos recibido nosotros, como docentes, y particularmente yo, como docente capacitada y capacitadora para poder abordar el tema en las escuelas. Es decir, el aborto no punible está atravesado por estos prejuicios y valores y sigue violado como derecho en esta provincia. Es por ello que existe una alta tasa de embarazo adolescente, lo que significa, a su vez, la vulneración de los derechos de las mujeres porque 6 de cada 10 mujeres menores de 20 años que son madres en nuestra provincia no han concluido sus estudios secundarios, a pesar de que la Ley de Educación Integral –a la cual adhiere esta provincia– indica que esas mujeres, niñas y adolescentes tienen que permanecer en la escuela y por lo cual insistimos en que tiene que haber guarderías gratuitas en todas las escuelas de nuestra provincia.

¿Por qué traer a discusión el tema en esta ocasión? En primer lugar, para hacer una devolución a quienes elaboraron el informe y para pedir –luego de que termine mi intervención– que el pedido de informes pase a archivo; pero también para responder a un debate que se generó en la Comisión de Equidad y que nos fue negado el debate profundo para que pueda ser traído a este recinto.

El problema de la violencia hacia las mujeres, el problema de la violencia hacia los sectores del LGTBI, el problema de cómo se imponen los estereotipos, lo que implica prácticas y conductas violentas para quienes somos receptoras de esa violencia de todo tipo, son temas muy complejos de abordar porque las respuestas y las soluciones son aisladas.

No se puede tratar de jornadas aisladas, situadas y planteadas en claves demagógicas después de un paro enorme como el que hicimos las mujeres el 19 de octubre pasado. Fueron jornadas aisladas también las que se impusieron el 23 de noviembre, donde se planteaba que las jornadas tenían que llamarse “Escuelas Libres de Violencia”, sin embargo, los docentes tampoco fueron capacitados, no hubo material y ahí quedó toda la jornada como respuesta. No se resuelve con dictar una ley para que se aplique sola, con docentes que no están totalmente capacitados y con instituciones que ponen trabas. Esos mismos docentes reclaman mayor tiempo para poder capacitarse, por lo que con una ley no alcanza. Esos docentes requieren aumento de sus salarios para poder dedicarle más tiempo y para estar más concentrados en la tarea que realizan cotidianamente. Ese salario debe ser igual al valor de una canasta familiar, por lo que nosotros denunciábamos que la provincia le negaba el acceso a ese derecho elemental.

Como decía, todas estas aristas que hacen a un problema complejo, profundo y estructural implican que el abordaje no pueda hacerse en compartimientos estancos. Cuando se nos responde a quienes exigimos la emergencia en materia de violencia contra las mujeres, como lo exigimos en la Comisión de Equidad hace quince días, se nos responde con una cantidad de cifras y datos en apenas dos páginas diciéndonos que no alcanza con declarar la emergencia, que no es necesario y no alcanza solamente con más plata, porque es un problema profundo, a eso les respondemos que, claro que es un problema profundo, estructural y complejo que abordamos en cada una de sus aristas, como demuestra este pedido de informes, como lo demuestran las tareas que realizamos en las escuelas las docentes, como lo demuestran nuestra pelea en las calles, la defensa de las comisiones de mujeres en los lugares de trabajo, de estudio y en las propias escuelas, como demuestran los debates que damos en las aulas y en las situaciones de las que nos hacemos cargo las docentes y las trabajadoras en cada uno de los ámbitos de trabajo.

Como no es suficiente, porque es un problema muy complejo, también decimos que sí es indispensable que exista ese presupuesto real para las mujeres víctimas de violencia, que se apliquen específicamente las licencias, que sean otorgadas, que los montos no sean irrisorios, porque cuando una canasta básica familiar está en los 23 mil pesos, los montos se mantienen en 3000 pesos para asistencia económica y de 5000 pesos para la asistencia para alquileres.

Entonces, cuando nos responden con esta burla, que es casi una provocación, como nos respondieron a las legisladoras que exigíamos la declaración de la emergencia, como lo vamos a volver a exigir en la nueva movilización que se va a realizar este sábado, estamos diciendo a este Estado que no nos revictimice, que no nos diga que está haciendo cosas para frenar la violencia porque no está haciendo las cosas ni están tomadas las medidas suficientes para frenar la violencia contra las mujeres, porque esta forma de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral es una muestra de la falta de un abordaje profundo e integral en cada uno de sus puntos y que nos tiene a las mujeres que venimos trabajando y reclamando esto desde hace años como protagonistas, como sujetos y como voces en las calles para que nos escuchen. Porque nos dicen que lo que hay es suficiente, mientras que miles de mujeres se movilizan a lo largo y a lo ancho del país para decir que no lo es. También les estamos diciendo que no somos víctimas del Estado, ni vamos a serlo, somos mujeres que luchan, que somos sujetos y que nos organizamos para exigir lo que nos corresponde.

Por eso, señoras y señores legisladores, he traído este debate al recinto en el día de hoy.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente: el proyecto de resolución 19863/L/16 cuenta con respuesta del Ministerio de Educación de la Provincia desde el mes de octubre, la que luego fue ampliada en razón de diversas inquietudes de su autora, la legisladora Laura Vilches, en noviembre del año pasado. Obra en mi poder dicha respuesta y voy a acompañarla para que sea incluida en el Diario de Sesiones.

No obstante, por tratarse de una temática trascendental en la educación de los niños y de los jóvenes, y para dejar en claro que desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con los postulados de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, haré referencia a los puntos sobresalientes de la misma.

La Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa lleva adelante, desde el año 2013, toda la actividad de formación institucional en educación sexual de las cuales han participado más de seiscientos directivos de instituciones de todos los niveles y modalidades, han sido capacitados de manera presencial y semipresencial más de cuarenta mil docentes, llevando la capacitación a todas las escuelas de la Provincia; luego, se realizaron jornadas de seguimiento y evaluación de los aprendizajes obtenidos, se produjo y distribuyó material didáctico, bibliográfico y pedagógico para el trabajo de la temática en las aulas; fundamentalmente, se trabajó dentro de los ejes conceptuales de la educación sexual integral, incluyendo la diversidad y la problemática de la violencia de género, abarcando a todos los actores de la comunidad educativa: docentes, no docentes, alumnos y familias. El documento que acompaño detalla uno a uno los cursos de formación realizados y los integrantes de los equipos técnicos responsables del área.

En esta oportunidad reitero algo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que es la predisposición de la Comisión de Educación para escuchar y gestionar las inquietudes de los legisladores de este Cuerpo. En esa línea, semana a semana, entregamos diferentes respuestas a pedidos de informes. No obstante, cuando esas iniciativas son presentadas para luego ser utilizadas como punto de partida de discusiones que van mucho más allá de conocer la gestión del Ejecutivo respecto a estos temas, el rumbo de la discrepancia es otro y excede toda posibilidad de debate y diálogo constructivo.

Por ello, señor presidente, siempre con la seguridad de que los esfuerzos por mejorar la calidad educativa y por dotar a los docentes y alumnos de las mejores herramientas para cumplir sus metas y propósitos de educar y aprender, es que desde el Ministerio de Educación se ha puesto en esta temática los mayores esfuerzos a disposición de todos los actores involucrados.

Estoy totalmente convencida de que el camino no se detiene y que el trabajo debe ser serio y constante. Este Gobierno nunca dejó esa responsabilidad, aunque muchas veces quisieron decirnos lo contrario.

También quiero dejar bien asentado que se trabajó, se trabaja y se trabajará por una educación inclusiva, demostrando continuamente políticas que hacen hechos y obras.

Si vamos a hablar de conductas violentas, realmente, los miembros de la Comisión de Género hemos sufrido, la semana pasada, conductas violentas con epítetos no acordes a una comisión que discute para mejorar el problema de la violencia y no para demostrar, dentro de la misma, lo que es la violencia.

Por los motivos expuestos, y considerando que el pedido de informe se encuentra respondido acabadamente, solicito el cierre del debate y ratifico el pedido de archivo del mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de adoptar como despacho de la Cámara en Comisión, el envío a archivo del proyecto 19863/L/16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se envía a archivo.

-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA BRARDA-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 125 y 143 del Orden del Día, proyectos 19946/L/16 y 21685/L/17.

Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: nuevamente en este recinto entra el tema del Complejo Esperanza, que recurrentemente traemos desde el año 2012, y sistemáticamente lo traemos porque está claro que el conflicto que envuelve la política penal juvenil de la Provincia de Córdoba nos lleva, una y otra vez, a pedir explicaciones.

El primer proyecto, que data del mes de octubre de 2016, y que en su momento fue producto de que la licenciada Krawchik, quien estaba al frente de la SENAF, concurriera a la Legislatura a explicar una serie de puntos, no solamente este, y no me voy a extender mucho porque voy a pedir el pase a archivo de este proyecto porque entiendo que ha pasado tanto tiempo que cualesquiera sean las respuestas a las que hagamos referencia están fuera de tiempo.

No obstante, quiero dejar sentado que sería de buena práctica que cuando traen a algún funcionario que es importante que vengan a dar respuestas, previamente ellos sepan que vienen a responder tales y cuales pedidos de informes, porque repasando la exposición de la licenciada Krawchik en ese momento, de ocho preguntas que se le hicieron, más o menos, con buena vista pudo responder cuatro y, precisamente, las que no se responden son aquellas que van generando mayor conflicto.

Fíjese que en aquel momento, en octubre del 2016, ya se había desatado el conflicto respecto de los guardias; una y otra vez he dicho acá, como se lo he dicho a quienes se desempeñan en esta área que el cambio de horario de los guardias del Complejo Esperanza –lo digo, incluso, como trabajadora de la salud mental- es absolutamente sensato, nadie puede trabajar en situación de encierro 24 horas, no es sano. Pero ya en aquel momento había generado conflicto la implementación de este régimen horario, y ahí creo que el conflicto no estaba dado por el cambio de horario simplemente, sino por el modo en que a veces se implementan las políticas públicas. Ninguna transformación -y quienes han estado en la gestión lo saben perfectamente- de un sistema que lleva muchos años se hace a los sopapos, sino que se hace en base a consensos. Y, así como digo que el cambio de horario era una cosa sana, del mismo modo digo que quienes se desempeñan como mal llamados guardias -ahora, asistentes de seguridad, de contención y asistencia-, vienen reclamando hace muchísimos años un encuadramiento administrativo legal acorde a la función que cumplen y, una y otra vez, sistemáticamente, los gobiernos de Unión por Córdoba meten el problema bajo la alfombra y se termina cortando por donde no se debe cortar que, precisamente, son los jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.

He contado en las comisiones que hay situaciones del orden de lo cotidiano que viven quienes están en contacto con estos jóvenes; por ejemplo, en el traslado de ellos hacia tribunales, en ese contexto, se producen muchas veces situaciones de agresión por parte de los jóvenes hacia los llamados guardias, y cuando los guardias concurren a la ART para que los cubra, la respuesta es “¿por qué, si usted es un administrativo? ¿qué hace cumpliendo funciones de seguridad?”. Desde esa cosa tan elemental es que hay un conflicto al que hay que darle resolución de fondo, y que no pasa solamente por acotar el horario.

El segundo proyecto es de este año; los dos tienen origen en las fugas, y este es un tema complejo; como otras veces hemos dicho, los jóvenes no son “carmelitas descalzas”, tienen conflictos, vienen de situaciones familiares y sociales altamente excluyentes. Pero también es cierto que no son el “chapo” Guzmán, cada vez que se han fugado lo han hecho –la mayoría de las veces- por la puerta, salvo la última fuga –que no es de la que estamos hablando, porque después de este pedido de informes volvió a haber una fuga-, en donde sí hubo un joven que trepó por uno de los alambrados, el resto se escapaban caminando.

También hemos hablado sobre que muchas veces, por los conflictos, existen cantidad de guardias menores a las que tiene que haber, como es el caso a esta respuesta, al segundo pedido de informes, 21685, en donde una de las preguntas hacía referencia a cuántos guardias había en el sector. Nos contestan que se fugaron cinco jóvenes y que había 14 operadores en ese módulo.

El módulo Nuevo Sol, que es uno de los cinco módulos que alberga a jóvenes en conflicto con la ley penal, es el más grande, alberga, aproximadamente, entre 110 y 130 jóvenes; tiene tres alas de cuatro sectores cada una, de máxima, media y mínima seguridad. Se calcula –no es un cálculo mío, históricamente fue así- que debía existir por guardia, o sea, por turno, en el Nuevo Sol, entre 29 y 31 operadores de seguridad. La respuesta oficial es que ese día que se produce la fuga había 14, la mitad.

Después, se le pregunta también -a ese momento de este pedido de informe- si hay personal del Servicio Penitenciario, y acá me detendré porque la presencia del Servicio Penitenciario en el Complejo Esperanza surge, precisamente, a partir del conflicto en el mes de marzo, donde, justamente por el conflicto en relación al horario, el Gobierno toma la decisión de que el Servicio Penitenciario ingrese al Complejo para hacerse cargo de la situación, ya que algunos de los guardias no habían querido entrar y, como parte del conflicto, después se les impidió a los que querían entrar que ingresaran.

Eso derivó en que a una semana y pico de estar el Servicio Penitenciario adentro del Complejo Esperanza, tres legisladoras –Caffaratti, El Sukaria y quien habla- presentáramos una acción de habeas corpus. La acción del habeas corpus fue presentada el día 10 de marzo. Lo dejaré en el recinto sentado, porque en una actitud poco esperable; con posterioridad a esto, se reunió el Consejo de Niñez y Adolescencia, que preside el Ministerio de Justicia. Digo “poco esperable” porque la legisladora Cafarratti, que está como representante en ese Consejo, no está hoy, y se vio sorprendida por la presencia del propio Ministro Angulo en esa primera reunión después del conflicto, llevando al Consejo la respuesta que habían hecho en sede judicial, que ya la conocemos porque había sido tramitada en el marco de habeas corpus.

En esa respuesta, la SeNAF le dice a un juez Penal Juvenil que había retirado el Servicio Penitenciario el día 8 de marzo. Lo quiero dejar sentado porque, además, estuvo en todos los medios de comunicación de nuestra Provincia. Eso es una absoluta mentira, que el titular de la SeNAF se animó a escribirla en una respuesta oficial ante un juez.

El Servicio Penitenciario fue sacado –y está en todos los medios de comunicación; además, tengo en mi poder el comunicado oficial del Ministerio de Justicia- el día 10 de marzo.

Para ser más precisa, les diré que nosotras ingresamos el habeas corpus alrededor de las dos de la tarde, previo haberle avisado personalmente al juez de turno, doctor González del Solar, que íbamos a llegar con un habeas corpus. A las cinco de la tarde, el Gobierno de la Provincia le comunicó a quienes estaban en huelga que el conflicto llegaba a su fin; nadie, absolutamente nadie, nos puede decir hasta el día de hoy cómo es que se resolvió el conflicto; nadie puede decirnos cuáles fueron las razones por las que un conflicto, que duró más de una semana, que tuvo a pibes lastimados con balas de goma –no lo digo yo, está informado precisamente en el mismo habeas corpus con los certificados médicos. ¿Cómo se resolvió el conflicto que durante una semana y pico estaba sin posibilidad de ser resuelto? y ¡oh! llama la atención que se resolvió tres horas después que presentáramos el hábeas corpus. En buena hora. Mire, pocas veces he sido tan eficiente.

En este pedido de informes no hacíamos referencia a si el Servicio Penitenciario había sido sacado después del habeas corpus. Concretamente, le decimos: si a posteriori de sacar el Servicio Penitenciario, en la actualidad existía gente de ese servicio adentro del complejo, sobre todo en los módulos. Segunda mentira.

Al día de hoy –no al día del conflicto, al día de ayer-, hasta la semana pasada, hay gente del Servicio Penitenciario adentro de los módulos, que tienen –dicen- la función de sólo comunicar por radio cuándo los jóvenes van a entrar o van a salir.

En verdad –lo digo con absoluta sinceridad-, las fugas que se siguen dando, las situaciones de violencia a las que estamos asistiendo en el marco del Complejo Esperanza –y que no son desconocidas por las autoridades y que terminaron la semana pasada con un pibe internado en el Hospital de Urgencias por la paliza que le propinaron otros jóvenes- nos hablan de que hay un aumento significativo de la violencia interna, y ese aumento significativo tiene una multicausalidad, entre ellas la presencia del Servicio Penitenciario.

Después preguntábamos en este pedido de informes si se habían suspendido o si continuaban los talleres y las clases, y nos dicen que no, que está todo en orden; también debo decir que, a raíz de los hechos de violencia internos que existen, cada dos por tres se suspenden las actividades, ya sea de talleres o de clases.

En definitiva, si bien voy a pedir el archivo –lo voy a pedir yo- de ambos pedidos de informes, sí me pareció oportuno dejar asentado, una vez más –seguramente en las próximas semanas otra vez vamos a hablar del Complejo Esperanza-, que existen innumerables dificultades adentro del Sistema Penal Juvenil.

También quiero hacer referencia a una situación que excede al Poder Ejecutivo, pero la voy a referir porque está claro que el Poder Ejecutivo tampoco logra resolverla. Desde hace mucho tiempo viene dándose una discusión en relación a los jóvenes del Complejo Esperanza que son mayores de 18 años. El último informe dice que tenemos más de 50 jóvenes mayores de 18 años albergados en el Complejo Esperanza; pero también quiero decirles que tenemos, aproximadamente, entre 20 y 30 jóvenes menores de 16 años, absolutamente inimputables, que están adentro de ese Complejo.

Hay una suerte de guerra entre los jueces penales juveniles respecto de este tema, y quizás lo podamos resolver nosotros cuando tratemos la reforma de la Ley 9944, porque esta situación también es una situación que genera violencia y que los jueces no quieren ver. Tenemos pibes de 22 años adentro del Complejo que cometieron un delito siendo menores de 18, que los jueces no elevan la causa a juicio, que a veces están dos años, sale y vuelven a entrar.

Miren, el jueves pasado estuve en el Complejo Esperanza reunida con el subsecretario, y en ese mismo momento en que yo estaba allí un juez penal juvenil derivó al

Complejo Esperanza un joven de 22 años –no me quiero equivocar, no me acuerdo si dijo 20 ó 22, pero lo dijo adelante mío el secretario-, y hablamos sobre esto, que es inadmisible que los jueces penales juveniles, en una guerra que viene desde hace un montón de años, no entiendan que la presencia de mayores de 18 años adentro del complejo es una de las razones centrales de la violencia que allí se vive.

Lo quiero dejar sentado porque me parece que es importante también desde nuestra función como legisladores poder hacer algo quizás para poner claridad en este tema, porque está claro que los sucesivos secretarios de Niñez, Adolescencia y Familia no han podido resolver el problema en un acuerdo con la Justicia.

Particularmente, creo que no lo han podido hacer porque a veces hay tantos condicionantes desde lo político que desde el Poder Ejecutivo no se animan a decirles a los jueces penales juveniles lo que hay que decirles, porque si no, no puede ser explicado cómo hace tantos años que sistemáticamente desde el Poder Ejecutivo se violan las Leyes -tanto nacional como provincial- de Protección hacia Niños, Niñas y Adolescentes.

Señor presidente, dicho esto, pido, más allá de la respuesta –si es que hay-, que pasen a Archivo estos dos proyectos.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: la legisladora pide que el proyecto pase a archivo, y respecto a eso tiene que quedar claro que no pasamos a archivo el tema Complejo Esperanza, seguramente van a venir más pedidos de informes -aunque no entró al Orden del Día, tengo presentado un pedido de citación al Ministro Angulo, sobre el problema del antecitado Complejo –y quiero agregar un par de datos que me parecen importantes: el día domingo me apersoné en el Complejo Esperanza para averiguar sobre el tema de la fuga y de algunas denuncias que tenía el personal del Servicio Penitenciario -estaba el tema del chico que había sido golpeado y todo lo demás.

Llegué a las diez y pico de la mañana y no me pudieron atender porque no había ningún responsable –eso pasa sábados y domingos. Es decir, un lugar que tiene fugas, gente herida y que ha copado el centro de toda la atención en esta provincia con los titulares de los diarios, sábados y domingos no tiene personal responsable.

Al otro día, me llamó un subsecretario y me dijo que le avisara, así me organizaba la visita. Quiero aclarar que no voy a avisar nunca para que me organicen nada porque para que me pinten un panorama que no es el real, no es preciso ir a verificar nada.

Creo que, independientemente del pase a archivo de esto, el tema sigue vigente y, cuando caiga en el temario del Orden del Día el tema de la citación del Ministro, posiblemente volvamos a insistir, pero sería conveniente que lo abordemos.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.

Sra. Bedano.- Señor presidente: quiero referirme a los pedidos de informes de la legisladora Montero.

En la Comisión de Derechos Humanos está abierta la discusión. El debate se hizo cuando se reunieron las cuatro comisiones en forma conjunta. En esa oportunidad, tomamos debida nota de los aportes que hizo la legisladora Montero para modificar la Ley 9944.

Sin lugar a dudas, estamos hablando de una población que no está en libertad, una población de menores y jóvenes –más que de menores de jóvenes-, aun con los números que mencionó la legisladora.

En la reunión que compartimos con otras tres comisiones, ella hizo aportes importantes. Es verdad que en el Complejo Esperanza tenemos pibes mayores de 18 años. La Justicia, tal cual ella lo vivenció en su visita, es la que, casi únicamente, deriva a los pibes mayores de 18 años al Complejo -que es algo que no correspondería hacer.

Estoy convencida de que los legisladores estamos en condiciones de modificar la Ley 9944 encontrando, en forma consensuada, la posibilidad de resolver esto. Pero, lo real es que hoy tenemos, en un espacio –y no cabe otra opción-, privados de su libertad, aun con talleres, aun con actividades, aun con las visitas de sus familiares, aun con contención desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, a gente joven que viene con problemas desde sus casas, desde la sociedad.

Desde mi ciudad también se deriva a los chicos –conozco los casos- al Complejo Esperanza. Conocemos las circunstancias en las que fueron tomados por la Justicia para poder, luego, derivarlos.

A los problemas que arrastran estos jóvenes no los podemos –ni podríamos- resolver en corto tiempo; por eso, es necesario mejorar la ley para que toda la sociedad tenga los

instrumentos necesarios para lograr su recuperación y poder devolverlos a la vida cotidiana como hombres, como muchachos jóvenes con total posibilidad de vivir una vida como cualquier otro: en libertad, respetando los derechos de los demás y asumiendo las responsabilidades que les caben.

Voy a referirme a los aspectos más relevantes de estos dos pedidos de informes que, a nuestro criterio, tienen las respuestas adecuadas, no sin antes aclarar que estos pedidos de informes fueron tratados en dos oportunidades en la comisión, en octubre de 2016 y en febrero de 2017.

En ambos casos, estuvieron presentes los responsable de la SeNAF, sus máximas autoridades, y se abordaron todos los temas relativos a la SeNAF, dando lugar a preguntas no sólo de los legisladores sino también de sus asesores, refiriéndose en forma particular a la fuga sucedida el 9 de setiembre de 2016 en el Complejo Esperanza. Este hecho tuvo una clara explicación por parte del responsable de la SeNAF.

El régimen de horarios –que también mencionó la legisladora- de los empleados que desempeñan funciones de seguridad, vigilancia, asistencia y mantenimiento en los centros socioeducativos dependientes de la SeNAF, fue parte importante en la actitud no responsable de algunas de las personas que permitieron la fuga de los menores.

También, y a fin de brindar una acabada respuesta al pedido de informes, en su momento, la licenciada Krawchik adjuntó a la misma copia de la resolución por la cual se había decidido modificar el anterior régimen de 24 horas por 72 horas de descanso, por un régimen de 12 por 36 horas.

No hay ninguna posibilidad, agotado el tiempo de conversación con ellos, agotado el tiempo de transición que podía transcurrir, de que no se acuerden estos cambios, hay que hacerlo en algún momento. Por supuesto que se lesionan hábitos y costumbres; seguramente, muchas de estas personas, que tenían 72 horas de descanso en el Complejo Esperanza, no tenían 72 horas de descanso en sus vidas personales, porque tenían otras obligaciones, otros trabajos, por lo tanto, se vieron lesionados incluso en sus ingresos, que provenían de esas otras tareas.

Esa decisión política fue tomada por el Ministro de Justicia de la Provincia, que impuso un horario racional que permite un mejor trabajo interno y una mejor distribución de tareas. Por supuesto, eso generó resistencia y la sigue generando, más todavía en aquellos que creen tener intereses particulares propios –como dije recién- por encima de los de aquellos que debían atender a los niños y jóvenes del complejo.

También, en aquella ocasión, la Secretaria trasladó la convicción que no se podían hacer más asambleas dentro de los sectores del complejo, ya que eso interfería con las actividades y porque el interés superior del niño no se puede ver afectado por asambleas que, por ejemplo, impidan a los chicos ir a los oficios o a las escuelas. Ello no significó en absoluto limitar los reclamos de los trabajadores; sólo implicó que se sentaran los sectores en una mesa a resolver los problemas, pero en algún momento, a la decisión política hay que tomarla.

Esta modificación fue el puntapié para que en la SeNAF se implemente, tomando experiencias de otros lugares como, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, un sistema de capacitación con criterio de inclusión y examen final organizado en niveles. Así nace, a través de la Resolución 182 del año pasado, un procedimiento inédito que tenía dos ejes principales: un Plan Integral de Capacitación para Centros Socioeducativos, que implicó que 291 guardias se capacitaran en tres módulos, de los cuales participaron el Poder Judicial, las ONG y reconocidos juristas del país, que concluyó con un examen donde aprobaron casi el 68 por ciento, y un proceso de selección para los nuevos ingresos, a través de una comisión integrada por la Universidad Católica de Córdoba, las tres Universidades Nacionales públicas existentes en la Provincia, y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, del Poder Judicial, que seleccionará al personal que, previamente, deberá efectuar un curso de capacitación en cuestiones de seguridad y pedagogía social, entre otras materias, y que nos lleva a la inédita situación en que el Poder Ejecutivo no selecciona su personal, sino que solamente hace la convocatoria y pone el soporte para que sea una comisión especializada la que lo seleccione.

De este proceso ejemplar se derivó la incorporación de 29 aspirantes que superaron todas las instancias y evaluaciones que comprendió el proceso de selección y que cuentan con el apto psicológico del Colegio de Psicólogos de Córdoba, siendo esto una de las preguntas contenidas en el pedido de informes. Por supuesto, esto a lo que estoy dando lectura está en manos de la autora del pedido de informes desde el primer momento en que el Ejecutivo envió su respuesta.

También en este marco, el 6 de mayo del corriente año, se publicó en la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba la segunda convocatoria abierta de personal para cubrir puestos de Operador de Asistencia y Seguridad para el Complejo, además de la

primera convocatoria para cubrir iguales puestos en el Centro Socioeducativo de Adolescentes Mujeres (CeSAM), que depende también de la SeNAF.

El tema Complejo Esperanza, como también todas las consideraciones respecto al mismo, ya han sido ampliamente abordadas tanto en las comisiones como en el recinto; nuestro Gobierno de la Provincia, el Ministro de Justicia y los legisladores de Unión por Córdoba estamos convencidos de ir por el camino correcto, y muestra de ello lo constituye el rechazo del habeas corpus correctivo colectivo a fines del mes de marzo, presentado por legisladoras de esta Cámara por parte del juez González del Solar, el mismo juez que dos años atrás le dio lugar a otro habeas corpus correctivo que, entre otras cosas, determinó una resolución que le indicó y ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia tomar medidas claras y concretas para mejorar la situación adentro del Complejo Esperanza. En esta oportunidad, el mismo juez argumentó que “no existe en la actualidad ni se advierte como inminente un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que los adolescentes cumplen la privación de la libertad”; como así también la reciente incorporación de nuevos guardias de seguridad que resultaron seleccionados de la manera que lo comenté hace escasos segundos.

Por eso decimos que no son casualidad los conflictos que se vienen suscitando en el Complejo; los cambios aun consensuados, o cuando son resultado de una decisión política y en un lugar tan sensible como el Complejo Esperanza, siempre crean resistencia y es más largo que corto el tiempo necesario para que cada uno pueda adoptar los nuevos hábitos.

Rápidamente, y con el fin de hacer más visible en el ámbito público un reclamo, se lo tiñe con el nombre de “intento de motín” y, ante ese nombre, familiares, especialistas, todo lo relacionado a minoridad y la opinión pública resultan presos de ese nombre. Ante estas prácticas, tomó intervención el Fiscal Tomás Casas quien imputó a dos guardias y a un representante gremial por las protestas extorsivas realizadas dentro del Complejo, desoyendo el dictamen del Ministerio de Trabajo.

Señor presidente: estamos firmemente convencidos de que el rumbo con el que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia en el Complejo Esperanza es el correcto. Existe la total voluntad de nuestro Poder Ejecutivo de perfeccionar paulatinamente, pero sin interrupción, todo el funcionamiento orgánico y adecuado, no solo del Complejo Esperanza sino también del Centro Socioeducativo de Adolescentes Mujeres CeSAM y del Centro de Admisión y Diagnóstico que está en la Ciudad de Villa María, para optimizar el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes allí resguardados y adecuarlos a los estándares internacionales que rigen en el Derecho Penal Juvenil.

Las reestructuraciones edilicias que dignificaron la calidad de vida de los jóvenes resguardados, las tareas concretadas relacionadas con la promoción educativa, la disciplina deportiva y la capacitación en oficios, la capacitación del personal y el proceso novedoso de selección para los nuevos ingresos, siempre teniendo como norte que la meta que debe perseguir el sistema es el cuidado y reinserción social de las niñas, niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal.

Antes de terminar, quiero reiterar que en la comisión está en debate la reforma de la Ley 9944 y que se toma debida nota de todos los aportes que hagan todos los legisladores que pertenecemos a esta Legislatura.

Finalmente, más allá que lo anticipó la autora de los pedidos de informes, cerramos aquí el debate y pido el archivo de estos proyectos.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de adoptar como despacho de Cámara en comisión el archivo de los expedientes 19946 y 21685/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración en envío a archivo de los expedientes 19946/L/16 y 21685/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Los mencionados proyectos se envían a archivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 150 del Orden del Día, proyecto 21542/L/17.

Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vagni

Sra. Vagni.- Señor presidente: la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba fue creada en el año 2012 por la Ley 10115, que en su artículo 2º establece como sus funciones generales la de ejercer el control y fiscalización en materia hídrico ambiental y de los recursos naturales en general en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos.

Asimismo, tiene a su cargo el control efectivo de toda actividad pública y/o privada que pueda afectar el equilibrio del ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y alteración sobre el mismo, y gestionando inmediata remediación.

La misma también es la encargada de la aplicación de las sanciones que juzgue necesarias y, en caso de detectar la afectación de recursos naturales en la Provincia, de imponer planes de remediación; y es quien dispone los procedimientos de control en todos los cursos y espejos de agua y en los territorios naturales de la Provincia a fin de detectar, tempranamente, actividades contaminantes y/o perniciosas para el ambiente.

Señor presidente, estamos ante un importante órgano de Gobierno que debe informar a la ciudadanía lo que hace, y también lo que deja de hacer.

Es una necesidad concreta la que tenemos, de conocer en forma certera y urgente con qué medios físicos, humanos, técnicos y económicos cuenta la Dirección de Policía Ambiental para cumplir y hacer cumplir las normas vigentes que son de su directa incumbencia; un derecho de todos los ciudadanos al acceso de la información pública ambiental, la de saber sobre las multas y sanciones que aplica, el cobro de las mismas y – como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones– es un deber del Estado producirlas, elaborarlas, organizarlas, sistematizarlas y difundirlas.

Si nos referimos al caso concreto de la situación del control de los bosques nativos en nuestra Provincia, es de público conocimiento que la superficie afectada asciende a 1.179 hectáreas alrededor de ecosistemas nativos que fueron modificados parcial o totalmente por el ser humano; en 2015 ya se acumulan 3.037,7 hectáreas de monte desforestado; entre 2012 y 2015 se desforestaron 21.556 hectáreas o el equivalente –como se dice siempre o le gusta decir a la prensa local– a 24,6 canchas de fútbol; hasta el año 2010 Córdoba perdió el 40 por ciento de bosque nativo, lamentablemente un total de 269 mil hectáreas. Lo poco que se controla del desmonte cordobés se hace mal y, muchas veces, demasiado lento.

Según los informes que tenemos de desmontes en las zonas rurales, algunas urbanas gozan de buena salud y arrasan con nuestra vegetación autóctona. Si bien la Policía Ambiental ha detectado y sancionado a numerosos emprendimientos que destruyeron sistemáticamente el bosque autóctono de la Provincia, sabemos, con claridad, que sus intervenciones han sido escasas, tardías y algunas frenadas por autoridades provinciales.

Señor presidente: es de público conocimiento que, en el caso del ordenamiento territorial del bosque nativo de nuestra Provincia –debate que debería estarse llevando a cabo con ahínco, participación pública ciudadana y compromiso de la Provincia toda–, una de las etapas incompleta es la de infracciones. Actualmente la que tienen comprende, únicamente, de 2014 y 2015. Esa etapa debería arrancar en 2005, con la sanción de la Ley 9219, de Prohibición de Desmontes Totales, de lo contrario sería otorgar una amnistía de hecho a los desmontes ilegales realizados en más de una década.

Es fundamental saber qué fechas abarca, qué multas se pusieron, cuántas, cuáles fueron abonadas y qué espacios fueron sancionados, dónde se solicitaron planes de remediación y fueron llevados a cabo. Esta información depende, única y exclusivamente, de la Dirección de Policía Ambiental; sostener lo contrario podría implicar que se genere una amnistía de hecho a este desmonte ilegal, como ya lo hemos mencionado.

Por otra parte, uno de los reproches más graves que enfrenta esta Dirección es la demora de las inspecciones y la falta de seguimiento de estos procesos.

Señor presidente, consideramos que esto se debe a que no cuentan con los medios necesarios para efectuar su tarea de distribución de las bases operativas; en tal sentido, podemos citar como ejemplo –como aquí se dijo en otras oportunidades– la base operativa de Villa Huidobro, que cuenta con área de influencia de 17.500 kilómetros cuadrados, aproximadamente, con un inspector y un vehículo, tal como se desprende de la información que consta en el sitio web oficial.

Por último, en el año 2012 el ex Gobernador De la Sota expresaba en la nota de elevación del proyecto de ley que establecía la creación de la Policía Ambiental: “...persiguiendo profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba”. No quedan dudas de que el Gobierno de Unión por Córdoba –actualmente a cargo del Gobernador Schiaretti– no respalda esto de la forma en que debiera hacerlo –no se mide a todos con la misma vara– y no exige que toda la información que posee –derivada de sus funciones– el único organismo encargado de controlar y evitar la constante degradación ambiental en toda la geografía cordobesa, sea transmitida a toda la sociedad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.

Sr. Buttarelli.- Señor presidente: encontrándose en tratamiento el expediente 21542/L/17, quiero destacar que –como es de conocimiento de la legisladora preopinante y del Pleno– la Comisión de Asuntos Ecológicos tiene en análisis el proyecto, sumamente importante, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En tal sentido, me comprometí a que, una vez finalizado su tratamiento, invitaremos al director de Policía Ambiental, doctor Adrián Rinaudo, para que dé respuesta a todos los pedidos de informes que tenemos en la comisión.

No obstante ello, ya elevamos el pedido de informes al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y, ni bien tengamos la respuesta correspondiente, se la haremos llegar a la legisladora que me precedió en el uso de la palabra.

Por estas razones, señor presidente, solicito la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de adoptar como despacho de la Cámara en comisión la vuelta a comisión del proyecto 21542/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en estado de comisión, que aconseja la vuelta a comisión del proyecto 21542/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

–Se enuncian los expedientes 22057 a 22063, 22071 a 22080, 22082 a 22084, 22087, 22089, 22090, 22092 a 22095, 22097, 22098 y 22102/L/17.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

-Despachos 21507 y 21563/E/17.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito incorporados en el temario concertado, que obra en cada banca, cuyos números son: 21958/L/17, 22033, 22042, 22048, 22074 y 22083/L/17 (compatibilizados), 22034, 22049 y 22057/L/17 (compatibilizados), 22041, 22045, 22051, 22054, 22055, 22056, 22058, 22059, 22060, 22061, 22062, 22063, 22071, 22072, 22073, 22075, 22076, 22077, 22078, 22079, 22080, 22082, 22084, 22087, 22089, 22090, 22092, 22093, 22094, 22095, 22097, 22098 y 22102/L/17.

En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito se consigne el voto negativo del interbloque Cambiemos al proyecto de declaración 22041/L/17.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos al proyecto de declaración 22041/L/17.

Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, solicito autorización para abstenernos en la votación del proyecto 22077/L/17.

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación de los proyectos 22062 y 22073/L/17.

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada por la legisladora Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito el giro a la Comisión de Derechos Humanos del proyecto 19082/L/16.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento de los proyectos 22032 y 22052/L/17, que cuentan con moción de tratamiento sobre tablas.

Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 30 de mayo de 2017.

Al Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126° del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 22032/L/17, por el que se repudia la imputación a tres legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores de la provincia de Mendoza por su participación en el paro nacional del pasado 6 de abril.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Córdoba, 31 de mayo de 2017.

Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora

S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente, el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22052/L/17, por el cual se rechaza la pretensión del Gobierno de la Provincia de Mendoza de desaforar y procesar penalmente a los legisladores provinciales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Héctor Fresina, Víctor da Vila y Lautaro Jiménez, por haber participado de las concentraciones y movilizaciones de trabajadores en el marco del paro nacional del 6 de abril del corriente año, en un claro ejercicio del derecho a peticionar y participar de toda movilización social.

Eduardo P. Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que acaban de ser leídas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero quiero dejar constancia del voto negativo del bloque Córdoba Podemos al proyecto 22059/L/17, toda vez que nos parece que no puede declararse de interés el inicio de una gestión de gobierno.

Además, en nombre del bloque Córdoba Podemos solicito autorización para abstenernos de votar el proyecto 22054/L/17.

Asimismo, quiero dejar planteada la solicitud de este bloque para que cada vez que la Legislatura adhiera a eventos realizados por organizaciones de la sociedad civil, se nos remita el proyecto con los antecedentes de esa sociedad civil, ya que empieza a haber problemas respecto de algunas situaciones que se han sucedido en esta Cámara cuando no están los antecedentes suficientemente acreditados.

Sr. Presidente (González).- Se deja constancia del voto negativo del bloque Córdoba Podemos al proyecto 22059/L/17.

En consideración la solicitud de abstención del bloque Córdoba Podemos al proyecto 22054/L/17.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Vilches para fundamentar su pedido de reconsideración de la votación.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque nos parece que es un ataque sin precedentes el que se está efectuando a nuestros pares en la Legislatura de Mendoza.

Se está iniciando un proceso de desafuero de los legisladores pertenecientes al bloque Frente de Izquierda Fresina, Jiménez y da Vila, simplemente por el hecho de haber participado en la jornada del 6 de abril acompañando a los trabajadores y trabajadoras que se movilizaban y manifestaban el día del paro nacional, como lo hacían todos los trabajadores del país contra las medidas de ajuste del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales.

Nos parece que atacar de esta manera el derecho de estos legisladores a manifestarse en base al artículo 194, que viene de la dictadura de Onganía, pretendiendo quitarles los fueros, como se puso en discusión -para hacer una comparación- solamente frente a Menem por su responsabilidad y complicidad por la explosión de Río Tercero, o en el caso de Patti, por su complicidad y responsabilidad en el genocidio, nos parece realmente aberrante. Lo único que han hecho estos legisladores es cumplir su mandato de acompañar a los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres y a la juventud en su derecho a peticionar y garantizarlo de esta manera.

Hay que decir, además, que no solamente ellos son atacados sino también otros trabajadores, como los del Supermercado Átomo o representantes de otras organizaciones sindicales, que están siendo perseguidos en este derecho.

Por lo tanto, nos parece que no se puede dejar pasar este antecedente que tiene como objetivo amedrentar a los trabajadores, a los diputados y a los legisladores del Frente de Izquierda. Si fuera así habría que poner en discusión que todos los legisladores, diputados y gobernantes que se han movilizado, como lo han hecho muchos legisladores de esta Cámara en la última movilización contra el fallo del 2 x 1 de la Corte Suprema de Justicia, o como lo ha hecho el propio Gobernador y Vicegobernadora de Mendoza -y está registrado- a la convocada por la causa Nisman.

Evidentemente, hay una selección de cuáles son las marchas a las que está permitido asistir y cuáles no, en qué caso se aplica el 194 y en qué caso no. Entendemos que se está violando este derecho de los trabajadores, de los sectores populares y, en este caso, de sus representantes, los legisladores del Frente de Izquierda, a peticionar, a movilizarse y a manifestarse en la vía pública.

Por estas razones solicitamos la reconsideración, ya que creemos que debe haber un pronunciamiento unánime en rechazo a este nefasto antecedente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: simplemente, para que quede constancia del apoyo a este pedido de reconsideración.

Los dos proyectos apuntan en el mismo sentido, ya que es un ataque a las libertades públicas, a los propios legisladores y diputados como representantes del pueblo, según fija la Constitución. Además, apoyo las manifestaciones de la legisladora que me precedió en el uso de la palabra.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por los legisladores Salas y Vilches.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 22053/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Córdoba, 31 de mayo de 2017.

Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quieren solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22053/L/17 por el cual se cita al recinto de la Legislatura, en el plazo de 5 días, al Ministro de Trabajo Omar Sereno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución de la Provincia de Córdoba (artículo 195 del Reglamento Interno), a los fines de brindar informes y responder sobre declaraciones suyas referidas, entre otros hechos, a la existencia de mafias en el Estado y la actividad privada ligada a los servicios públicos.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Eduardo Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: el hecho es extremadamente grave.

Se trata de una reunión clandestina que hubo en el mes de noviembre entre el Ministro de Trabajo, Omar Sereno, y un grupo de ex directivos de la Sección Córdoba de la UTA. Digo "clandestina" porque el propio Ministro, en la grabación que anda circulando dice: "esta reunión no debe existir, esta reunión hay que guardar discreción sobre la misma". Justo en ese momento había un conflicto y un proceso de conciliación obligatoria.

Independientemente del carácter clandestino, el Ministro hace aseveraciones graves por las cuales tiene que venir a la Legislatura y responder por ellas, y también en la Justicia, cuestión que vamos a presentar.

Para no perder tiempo e ir al centro del tema, les haría escuchar la grabación, pero dura como diez minutos, así que vamos a extraer algunas partes que son las más fuertes.

El Ministro textualmente le dice a estos trabajadores de la UTA: "Entonces, por ahí, la naturaleza de la actividad de ustedes es un servicio público en manos de privados que, como corresponde a todo servicio público en manos de privados, es un servicio -y lo niego si ustedes dicen que yo lo dije- de mafias asociadas en el negocio con las mafias del Estado".

El Ministro dice que en el Estado hay una mafia que toca a todos los servicios públicos -porque dice como a todo servicio público-, que está asociada con mafias privadas.

No conozco que el Ministro haya hecho alguna denuncia de carácter público, no sé si se lo dijo al Gobernador o a alguien más. Pero él es un funcionario público, sabe que hay mafias, los asevera y no solamente eso, va más lejos, porque más adelante involucra a un hombre del Gobierno, como es el Secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, y dice: "Bermúdez es un nombre del sistema". Y cuando los trabajadores le dicen algo, por ejemplo, respecto a una empresa que se llamaba Autobuses Santa Fe, pusieron un balance trucho e igual le dieron la licitación, dice: "La política lo puede, es el arte de lo posible".

Ahora, este problema de la mafia en el Estado, el Ministro la traslada a otro tema, que es enormemente grave porque relatando cómo son las asambleas en el medio de ese conflicto, que fue -reitero- en el mes de noviembre, dice: "hay que tener cuidado con las que se realizan porque terminan hablando unos zurdos troskos, que yo dudo que sean choferes", etcétera.

Quiero aclarar que los zurdos troskos que él dice, que no eran troskos y no sé qué es lo que entiende él por zurdo, pero son los que después ganaron dos cuerpos de delegados de tres en los que se presentaron, pero lo que dice después es lo siguiente: “a los zurdos los sacamos nosotros”. Esto es de una gravedad enorme, cada vez que un gobierno dijo: “a los zurdos lo sacamos nosotros”, en este país hubo un drama. Fue el Gobierno del '74 que creó la Triple A, un gobierno constitucional de Perón, para sacarse a los zurdos de encima, incluso, algunos de los que están en esta Cámara han padecido esto; si quiere vamos más cerca: en una reunión, también clandestina -similar a esta- se organizó cómo se sacaba a los zurdos que luchaban contra las tercerizaciones del ex Ferrocarril Roca, y terminó con la muerte y asesinato de Mariano Ferreyra.

¿Qué dice alguien que está en el Estado, con respecto a cuáles son los mecanismos que va a utilizar para sacarse a los zurdos? Es extremadamente grave por parte de alguien que tiene poder para “sacarse los zurdos de encima” -como dice él. Yo tengo claramente un efecto sobre estos zurdos, porque él reconoce que al abogado Jorge Navarro, que es un abogado laboralista y dirigente de nuestro partido, le frena sus planteos en el Ministerio, y dice textualmente: “ya lo hemos corrido a Navarro dos o tres veces, inclusive, pusimos un funcionario nuevo que se equivocó, le dimos una denuncia, pero después se la revocamos y el funcionario este no había entendido la jugada”.

Así que resulta que un funcionario usa su autoridad para joderle las presentaciones que responden a un trabajador atacando al abogado que él dice que es un zurdo. Entonces, ¿cuál es la situación de los trabajadores representados por Navarro? ¿Qué situación de igualdad presenta ese Ministerio que se dedica al trabajo? Dice que hay mafias pero no las denuncia; dice que se va a sacar a los zurdos de encima y asume la responsabilidad, “de los zurdos nos ocupamos nosotros”, y luego cajonea los expedientes de un abogado que caracteriza de zurdo.

La gravedad es enorme; al Ministro hay que echarlo, pero antes quiero que venga acá y dé la cara, que lo interpelemos porque esto es de una gravedad enorme y quiero saber cuáles son las mafias que este Ministro conoce.

Creo que toda la Cámara debiera apoyar este pedido de que venga el Ministro, y si quieren paramos acá, nada más que venga, no discutimos más y resolvemos esto porque es muy grave.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- Tenemos tres preferencias para tratar vinculadas al proyecto 21403, de la legisladora El Sukaria, que es una moción de preferencia por siete días.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tenemos el expediente 19377/L/16, con moción de preferencia que será leído a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 31 de mayo de 2017.

Sr. Presidente

de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

Dr. Martín Llaryora

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, una preferencia de catorce días para el proyecto 19377/L/16, a fin de que sea incorporado al Orden de Día de la próxima sesión.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

José Eugenio Díaz

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia de catorce días para el proyecto 19377L/16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Sandra Trigo a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. Pero antes, la Presidencia le desea un feliz cumpleaños a la legisladora Nilda Roldán, que cumple años en el día de la fecha.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 06.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto

Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos